

Sr. José Luís Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno

Sr. Pedro Solbes, Ministro de Economía y Hacienda, y Representante español en la Junta de Gobernadores del BM y el FMI

Sr. Luís Martí, Director Ejecutivo en el Banco Mundial para España

CC: Sr. Ramón Guzmán, Director General de Financiación Internacional, y Sra. Isabel Riaño, Subdirectora General de Instituciones Financieras Multilaterales.

13 de septiembre de 2006

Estimados Srs.,

Nos dirigimos a ustedes en relación a las próximas Reuniones Anuales (Juntas de Gobernadores) del Grupo del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que tendrán lugar en Singapur el 19 y 20 de septiembre.

La influencia que tanto el BM como el FMI tienen sobre los países empobrecidos y, por lo tanto, sobre la vida de millones de personas en el mundo está fuera de cuestión. A pesar de su importancia, el Gobierno español ha mantenido tradicionalmente una posición de apoyo pasivo a las políticas que han venido impulsando dichas instituciones, así como un silencio absoluto cuando se ha tratado de informar a la ciudadanía española sobre su participación en las mismas. Creemos que ya va siendo hora de que este silencio se rompa.

Las organizaciones abajo firmantes **reclamamos al Gobierno español y a sus representantes en ambas instituciones que informen a la ciudadanía española sobre el posicionamiento que nuestro gobierno defenderá en las próximas reuniones anuales del BM y el FMI**, en las que se discutirán y decidirán asuntos que afectan al devenir y la supervivencia de millones de personas. Reclamamos asimismo que, con posterioridad a las reuniones, se informe también públicamente de los **resultados de las mismas y las posiciones finalmente apoyadas por los representantes españoles**.

Por otro lado, queremos aprovechar esta ocasión para **expresar nuestra profunda preocupación por una serie de cuestiones** relativas a las políticas del BM y el FMI:

Reforma de la Gobernabilidad del FMI

A raíz de la actual revisión de cuotas/votos en el FMI, se ha producido una creciente discusión acerca de necesaria reformulación del modelo de gobernabilidad de la institución. Múltiples organizaciones sociales, académicas y otras instituciones vienen señalando desde hace tiempo que el FMI presenta graves deficiencias a nivel de su democracia, transparencia, rendición de cuentas, legitimidad y eficacia. La medida a discutir en Singapur de ampliar la representatividad de China, México, Turquía y Corea del Sur, y otras contempladas en la Revisión estratégica que actualmente está llevando a cabo el Director Gerente, Rodrigo Rato, no son más que una cortina de humo ante la evidente crisis de gobernabilidad y legitimidad del Fondo¹.

Las denuncias de falta de democracia y legitimidad no son exclusivas hacia el FMI, sino que se hacen extensibles también al Banco Mundial y a otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Europeo de Inversiones. Para la sociedad civil resulta evidente la necesidad de una profunda reformulación en el modelo de gobernabilidad de las Instituciones Financieras Internacionales, que no sólo afecte a la repartición de votos, sino también a procesos como la elección de Presidente y Director gerente. Desde esa perspectiva las organizaciones abajo firmantes consideramos que un sistema realmente justo de reparto de votos debe ser el que pondere el peso demográfico de cada uno de los estados miembro.

¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno español ante la falta evidente de democracia en el BM y el FMI? ¿Apoyaría el Gobierno español un nuevo sistema de

¹ Para más información ver la Declaración abierta de diversas Organizaciones de la Sociedad Civil Europeas sobre la reforma de la Gobernabilidad del FMI, firmada por cerca de cincuenta ONGs europeas: <http://www.brettonwoodsproject.org/art.shtml?x=539444>

votos en las IFIs, más democrático, que diese más poder a los países empobrecidos, y en el que, por tanto, se redujese el peso de los países ricos?

Nueva estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco Mundial

En las pasadas reuniones de primavera del BM y el FMI, el Comité para el Desarrollo pidió al BM la elaboración de una nueva estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción para los países del Sur. El documento final que recoge esta estrategia será presentado en las próximas reuniones anuales. Desde la sociedad civil se han venido denunciando la falta de transparencia y participación social en dicho proceso, puesto que se ha podido participar tan sólo cuando el proceso ya estaba muy avanzado y con plazos extremadamente cortos. Además, las consultas se han realizado sobre documentos generalistas, mientras que un borrador mucho más detallado de la estrategia no ha sido distribuido ni discutido con la sociedad civil. Por otro lado, el enfoque de la estrategia defendida por el BM es claramente intervencionista (toma de decisión en el BM e imposición en el país), dando al traste con el principio de "propiedad" ("ownership") en las políticas de lucha contra la pobreza que dice fomentar el BM.

En cuanto a la cuestión de la lucha contra la corrupción, es claro que el Banco Mundial carece de la legitimidad e incluso la capacidad para convertirse en un árbitro imparcial en este tema. La historia del propio Banco está manchada por numerosos casos internos de corrupción y por el apoyo de la institución a regímenes notoriamente corruptos como los de Mobutu en el Zaire, Marcos en Filipinas, Suharto en Indonesia o Pinochet en Chile. El BM no puede ser a la vez juez, jurado, fiscal e implicado en la lucha contra la corrupción. Es evidente, pues, que el BM tiene un trabajo pendiente sobre el tema de la corrupción, y éste debe consistir en evaluar su pasado y su presente y asumir la responsabilidad en el fomento de la corrupción. La lucha contra la corrupción es sin duda una cuestión de suma importancia, no sólo en los países del Sur, sino también y sobretodo en el Norte, donde las empresas transnacionales juegan un papel clave en el fomento de la corrupción. Precisamente por ello no se puede dejar en manos de instituciones como el BM.

¿Cuál es la opinión del Gobierno español frente a esta nueva Estrategia de Gobernabilidad y Anticorrupción del Banco Mundial? ¿Qué esfuerzos ha realizado para facilitar la participación de la sociedad civil española en el proceso de elaboración de dicha estrategia?

Por otro lado, el FMI tiene también su responsabilidad en el fomento de la corrupción y la fuga de capitales. Las evaluaciones de los centros *offshore* realizadas desde el año 2000 siguiendo los acuerdos del Foro de Estabilidad Financiera no han frenado los abusos del sistema financiero internacional ni el incumplimiento de los estándares internacionales por determinados países y territorios que la OCDE catalogó como paraísos fiscales. Los informes anuales de la Oficina contra el Narcotráfico (*Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs*) del Departamento de Estado de los EEUU muestran con detalle cómo las entidades y sociedades registradas en las Islas Vírgenes, las Caimán, Liechtenstein, Nauru o Gibraltar son utilizadas por las mafias de la droga para el blanqueo de sus beneficios y por los grupos terroristas para obtener su financiación ilegal. Numerosos expertos solventes de la Red por la Justicia Fiscal/Tax Justice Network y Attac han denunciado que las evaluaciones de los centros *offshore* llevadas a cabo por el FMI han contribuido a su consolidación y homologación como centros financieros respetables, favoreciendo así los procesos de lavado de dinero sucio y la financiación de los grupos terroristas junto a la fuga de capitales y la corrupción de las élites de los países con Estados menos estructurados como son muchos en el Sur.

¿Cuál es la valoración del Gobierno español respecto al programa de evaluación de los centros financieros offshore (paraísos fiscales) que realiza el FMI?

Condicionabilidad

Tanto el BM como el FMI vienen utilizando desde hace décadas la condicionabilidad en sus créditos y programas de ayuda, incluso en las iniciativas de alivio de la Deuda Externa. Desde la década de los 80 esta condicionabilidad, ya sea en el marco de los viejos Programas de Ajuste Estructural o en los actuales Programas de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, entre muchos otros instrumentos, ha obligado a muchos países a emprender dolorosos procesos de liberalización de sus economías (facilitando el acceso a empresas transnacionales del Norte y agravando los impactos negativos de un sistema de comercio internacional injusto),

privatización de empresas y servicios públicos (incluyendo pensiones, educación y sanidad) y sobre-explotación de sus recursos naturales, entre muchas otras medidas. La condicionalidad en los créditos y programas del Fondo y del Banco ha acarreado impactos altamente negativos sobre el bienestar de millones de personas, que han visto como sus niveles de pobreza aumentaban y el acceso a los servicios más básicos les era negado. Numerosos estudios realizados por ONGs², instituciones académicas e incluso organizaciones internacionales como el PNUD o Gobiernos como el británico o el noruego, apoyan este análisis. De este modo no es exagerado decir que el BM y el FMI han jugado y juegan un papel decisivo en la imposición de políticas económicas de corte liberal en todo el mundo. Políticas que tienen un tremendo impacto social y ambiental y que nos alejan del cumplimiento de los Objetivos del Milenio que el Gobierno español afirma defender.

Desde la sociedad civil entendemos que las políticas para luchar contra la pobreza deben ser diseñadas por los propios pueblos del Sur, y que las únicas condiciones que pueden llegar a reclamar los países e instituciones donantes son transparencia en la gestión de los recursos (de manera que las organizaciones sociales locales puedan ejercer un control democrático sobre sus gobiernos), y que los proyectos financiados vayan encaminados al desarrollo de los derechos humanos, los derechos laborales, la armonía con el entorno y el desarrollo democrático.

¿Apoya el Gobierno español la política de condicionalidad del BM y el FMI y por tanto asume su corresponsabilidad en los impactos de dicha política?

Gestión de la Deuda Externa Multilateral

Tanto el BM como el FMI tienen una enorme responsabilidad en la generación y perpetuación de la crisis de la Deuda Externa de los países del Sur. En las décadas de los 70 y 80 el Banco fomentó una política de préstamo irresponsable que incrementó de forma importante el sobre-endeudamiento de los países del Sur. Desde mediados de los 80, cuando BM y FMI fueron designados para intentar encontrar una solución a la crisis de la Deuda, éstos han venido imponiendo una serie de políticas que no han hecho más que agravarla. Las políticas de gestión de la Deuda han estado marcadas por la condicionalidad y el alineamiento forzoso de los países del sur con los dictámenes del Consenso de Washington. La misma Iniciativa HIPC ha supuesto la imposición de condiciones leoninas para los países del Sur más altamente endeudados y empobrecidos.

Las políticas de gestión de la Deuda externa que realizan y promueven las instituciones internacionales como el BM y el FMI no tienen en cuenta la existencia de Deudas cuyo origen o gestión encierra claramente irregularidades o incluso ilegalidades. Estas Deudas fraudulentas, odiosas e ilegítimas deben ser reconocidas como tales a través de procesos de auditorías públicas e integrales, y anuladas sin condiciones, como primer paso para la abolición total de la deuda externa de los países del Sur.

En este sentido el Gobierno noruego ha pedido al BM que realice, junto a la UNCTAD, un informe sobre las deudas odiosas e ilegítimas, donando 20 mil dólares para tal tarea. Desde la sociedad civil esperamos que el proceso iniciado por el gobierno Noruego sea apoyado por los representantes españoles en el BM.

¿Cuál ha sido la reacción de los representantes españoles en el BM ante la propuesta del Gobierno Noruego?

- Auditorías Públicas Integrales en el BM y el FMI

En el contexto de la actual "cruzada contra la corrupción" del BM, liderada por su presidente Paul Wolfowitz, se hace especialmente inexcusable una revisión crítica de los impactos de las actuaciones del Banco y el FMI en el pasado y presente, de sus políticas de préstamo, de sus apoyos a determinados regímenes dictatoriales y corruptos, de su apoyo parcial a las grandes empresas transnacionales del Norte, etc. Además es necesario que estas evaluaciones sean públicas, para mejorar la gestión democrática de ambos organismos. Por ello es imprescindible la realización de Auditorías Públicas Integrales de las actuaciones de ambas instituciones. Estas

² Ver por ejemplo los recientes informes de Eurodad "La condicionalidad del Banco Mundial y el FMI: una injusticia para el desarrollo" en http://www.choike.org/documentos/ifis_eurodad_wb_imf_condicionality.pdf; y de Christian Aid "Challenging conditions" en <http://www.christianaid.org.uk/indepth/607ifis/challengingconditions.pdf>

auditorías no deben referirse únicamente a los aspectos económicos, sino también a las consecuencias ambientales y sociales del trabajo del Banco y del Fondo.

¿Cuál es la posición del Gobierno español respecto a la demanda de realización de Auditorías Públicas Integrales de las actuaciones del BM y el FMI?

Por todo lo expuesto instamos al Gobierno español y a sus representantes en el Banco Mundial y el FMI a que retiren el apoyo a dichas organizaciones hasta que no cesen con las políticas dañinas para los pueblos del Sur y para el planeta. La única opción para que esas instituciones luchen contra la pobreza y la degradación ambiental, de haberla, es una reforma profunda de su sistema de toma de decisiones, funcionamiento y funciones. O bien el cierre de ambas instituciones para, de ésta forma, poder dotarnos de una nueva arquitectura financiera internacional realmente al servicio de las personas y el medioambiente.

Atentamente,

ACSUR-Las Segovias
AGERMANAMENT sense fronteres
Àgora Nord -Sud
Alternativa Solidaria - PLENTY
Asociación de desarrollo sostenible y solidario GUAIAIE
Asociación de Estudios Geobiológicos (GEA)
Asociación Guaiiae
Asociación para la Defensa de la Naturaleza de Sierra de Gata (Vettonia)
Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA)
Asociación Paz con Dignidad
Asociación Pro Derechos Humanos de España – APDHE
Asociación Pro-Derechos humanos de Andalucía
Attac España
Campaña por la Abolición de la Deuda "¿Quién debe a Quién?" - QDQ
Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza de la Universidad de Córdoba
Colectivo de Colombianos Refugiados en Asturias
Colectivo de refugiados Colombianos en España
Colectivo de Solidaridad por la Justicia y Dignidad de los Pueblos: COLICHE
Comité Oscar Romero de Madrid
Comunidad de Vanguardia Obrera
Comunidad Mundial de la Madre Tierra
Comunidades Cristianas Populares del Estado Español
Confederación Ecologistas en Acción
Cristianos por el Socialismo
Derechos para Tod@s
Ecologistes en Acció de Catalunya
Els Verds Esquerra Ecologista de Catalunya
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos
Espai Alternatiu País Valencià
Esquerra Unida País Valencià
Federación de Comités de Solidaridad con África Negra
Icaria editorial
IDEAS-Comercio Justo
Iglesia de Base de Madrid
Izquierda Unida Federal
Justicia y Paz - Valladolid
MRG-Valencia
Observatorio de la Deuda en la Globalización - ODG
Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa – RCADE
Transnational Institute (TNI)

... más numerosas adhesiones individuales.